

Jueves 28 de marzo del 2002

## • TRANSICIONES •

Víctor Alejandro Espinoza Valle



## La verdad nunca se sabe

En 1999 la Editorial Tusquets publicó un libro memorable del escritor mexicalense vecindado en el Distrito Federal, Daniel Sada. El título es por demás sugerente: *Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe*. Trata de los asesinatos políticos de los seguidores del candidato Juan Andrew Almazán, rival del candidato del sistema Manuel Ávila Camacho, durante el año aciago de 1940. Parece una regla aplicable a la historia mexicana y a la de nuestros vecinos del Norte: Que los asesinatos políticos, por más evidencias presentadas, son concebidos popularmente como crímenes de Estado. Los asesinatos políticos se han relacionado con la sucesión presidencial. De menor trascendencia, pero sin duda de la misma importancia para sus seguidores, las muertes de candidatos a gobernadores y alcaldes en campaña despiertan las mismas sospechas: A la autoría intelectual se le ubica en los altos círculos gubernamentales. Los asesinatos de Álvaro Obregón en 1928 y de Luis Donaldo Colosio en 1994, no son aceptados como producto de una sola persona. Para el imaginario colectivo, sólo pudieron ser concebidos por mentes maquiavélicas ligadas al Presidente en turno. El presidencialismo mexicano, que se ha materializado en el poder omnímodo del gobernante en turno, permite concebir que hasta los deseos más íntimos pueden ser cumplidos por sus incondicionales o por los hombres sin rostro del sistema político. La respuesta que es lugar común atribuida a un ex Presidente es parte de nuestra cultura política: "¿Qué horas son? Las que usted guste señor licenciado". No es de extrañar que si el Ejecutivo imaginara la posibilidad de deshacerse del candidato presidencial, algún servil incondicional se le hubiera adelantado para cumplir sus deseos. Sin descartar que la misma voluntad presidencial haya sido la de efectivamente resolver una campaña venida a menos.

Hace ahora ocho años fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Sin duda, su deceso aceleró la transición democrática. En el fondo fue el detonador de una gran desilusión ciudadana. Se trató de una verdadera caída del sistema. Muy pocos creyeron en la hipótesis del asesino solitario. Hay muchas evidencias, tal vez poco fundamentadas, que sugieren que la orden a Mario Aburto llegó de lo alto de la cúspide del poder político. Luego la forma en que se llevó a cabo la investigación abonó las suspicacias. Por ejemplo, uno no puede más que desconfiar de un personaje como el ex fiscal Pablo Chapa Bezanilla, capaz de sembrar osamentas y de auxiliarse de videntes para resolver los casos más intrincados. Pero atrás del célebre abogado se encuentra todo un sistema de impartición de justicia que permite este tipo de locuras. ¿Se puede confiar así en la versión oficial?

Para el ciudadano común y corriente la explicación del asesinato de Luis Donaldo Colosio se encuentra en el golpeo que se dio al interior del grupo gobernante ante la sucesión presidencial de 1994. Quienes más caro pagaron la factura de la crisis de los mecanismos de designación del candidato presidencial fueron Luis Donaldo Colosio y Manuel Camacho Solís. Los dos fueron sacrificados, aunque de distinta forma. El resultado fue la nueva designación que recayó en un candidato accidental: Ernesto Zedillo Ponce de León. De perseguir a la gubernatura de Baja California aceptó la mayor responsabilidad a que un político profesional puede aspirar: La Presidencia de la República. De sus primeras y patéticas apariciones en público existen cantidad de evidencias. Pronto aprendería todas las mañas del ejercicio del poder autoritario.

Recientemente nuestro periódico informaba del costo de las indagatorias del caso Colosio. Se trata del proceso judicial más caro en la historia de nuestro país: Aproximadamente 130 millones de pesos. Mucho dinero que poco ha servido para revertir la conclusión a que la mayoría de los mexicanos llegaron aquella negra noche del 23 de marzo de 1994: Fue un asesinato de Estado. Sin esos recursos económicos un acucioso equipo de periodistas encabezados por Jesús Blancornelas concluyeron mucho tiempo antes que la fiscalía especial que se trató de un asesino solitario. Han pasado ocho años y la sociedad sigue viendo el magnicidio como el producto de un plan urdido desde el centro del poder político.

El autor es politólogo, secretario general académico de El Colegio de la Frontera Norte.